Proyecto de Ley N° 154/2021 - PJ

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Presidencia del Poder Judicial

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
08 SEP 2021
RECIBIDO
Firma... Hora. 11:30

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Firma Digital
Firmado digitalmente por BARRIOS ALVARADO Elvia FAU 20159981216 soft
Cargo: Presidenta Del Poder Judicial
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.08.2021 19:31:02 -05:00

Lima, 20 de Agosto del 2021

OFICIO N° 000223-2021-P-PJ

Señora Magister
MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
Presente. -

Referencia : Oficio N.° 000073-2021-P-PJ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla muy cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que mediante el documento de la referencia, esta Presidencia presento al Congreso de la República, el Proyecto de Ley que propone la modificación de los artículo 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401° y 403° del Código Procesal Civil, artículos 23° y 33 B.2 de la Ley N.° 26979, en mérito a la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú.

Al respecto, es pertinente señalar que dicho proyecto de ley no se ubica en la página web del Congreso de la República, lo que no permite identificar el estado del mismo; por ello, a fin de darse el trámite correspondiente, se reitera la presentación de la referida iniciativa legislativa y la Resolución Administrativa N.° 000005-2021-SP-CS-PJ emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, que aprobó la presentación del citado proyecto de ley; para los fines de su competencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
(*Documento firmado digitalmente*)

EBA/bmr

Firma Digital
rmado digitalmente por
ENALOZA MATIAS Willian Carlos
AU 20159981216 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 20.08.2021 12:14:48 -05:00

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: **https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd** CÓDIGO: **192240** CLAVE: **TOLT6B**

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Firma Digital
Firmado digitalmente por BARRIOS ALVARADO Elvia FAU 20159981216 soft
Cargo: Presidente De Sala Plena
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2021 18:08:32 -05:00

Lima, 24 de Febrero del 2021

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SALA PLENA N° 000005-2021-SP-CS-PJ

VISTO:

El Proyecto de Ley que propone modificar los artículos 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401° y 403° del Código Procesal Civil, artículos 23° y 33 B.2 de la Ley N.° 26979; y, la Razón emitida por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de la República.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo 138° de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y la ejerce el Poder Judicial, a través de los órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución Política del Perú y las leyes.

SEGUNDO: Que, la propuesta legislativa en referencia tiene como propósito reformular instituciones procesales que otorgarán mayor rigurosidad formal al recurso extraordinario de casación, cuyo impacto coadyuvará a acelerar el proceso de la descarga procesal en la Corte Suprema de Justicia de la República, pues frente a un menor ingreso de expedientes permitirá que la máxima instancia judicial funcione con mayor celeridad en la solución de los conflictos y concentrarse en el cumplimiento de los fines del Recurso de Casación.

Por estos fundamentos, en uso de la facultad constitucional de iniciativa legislativa, prevista en el artículo 107° de la Constitución Política del Estado; de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 80° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, estando al Acuerdo N.° 87-2018 de la Vigésimo Quinto Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, del 5 de noviembre de 2018.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ***APROBAR*** la presentación del Proyecto de Ley que propone modificar *los artículos 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401° y 403° del Código Procesal Civil, artículos 23° y 33 B.2 de la Ley N.° 26979*.

Firma Digital
rmado digitalmente por ENALOZA MATIAS Willian Carlos AU 20159981216 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 22.02.2021 14:32:26 -05:00

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: **https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd** CÓDIGO: **126367** CLAVE: **KRN5PC**

ARTÍCULO SEGUNDO: ***REMITIR*** al Congreso de la República, dicha iniciativa legislativa en los términos propuestos, para los fines de su competencia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
(*Documento firmado digitalmente*)

EBA/bmr

Firma Digital

rmado digitalmente por
ENALOZA MATIAS Willian Carlos
AU 20159981216 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 22.02.2021 14:32:26 -05:00

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: **https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd** CÓDIGO: **126367** CLAVE: **KRN5PC**



Corte Suprema de Justicia de la República

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401°, 403° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ARTÍCULOS 23°, 33B.2 DE LA LEY N° 26979

Corte Suprema de Justicia de la República

Proyecto de Ley N° _____

"PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401°, 403° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ARTÍCULOS 23°, 33B.2 DE LA LEY N° 26979.

El Poder Judicial del Perú, en mérito a la propuesta formulada por la Comisión para la Reformulación de las Prácticas y Competencias Casatorias designada por Acuerdo N° 32-2018 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y Resolución de Presidencia del Poder Judicial de fecha 2 de agosto del presente año, en el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y artículo 80° inciso 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y conforme lo establecen los artículos 74° y 75° del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401°, 403° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ARTÍCULOS 23°, 33B.2 DE LA LEY N° 26979

I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1. ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley tiene como antecedentes los siguientes proyectos:

- Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil, presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Proyecto de Ley N° 3732-2014-PJ- "Ley de Casación Civil y Contenciosa Administrativa, presentado por el Poder Judicial.
- Proyecto de Ley N° 1417-2016-CR- "Ley que modifica el artículo 388° numeral 1 y 392°-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil", presentado por el partido político Fuerza Popular.
- Proyecto de Ley N° 4260-2014-CR- "Ley que modifica el artículo 392°-A del Código Procesal Civil, presentado por el partido Fuerza Popular.

- Proyecto de Ley N° 1873-2012-CR- "Ley que propone la modificación del capítulo IV, del artículo 384° al 400° del Decreto Legislativo N° 768, Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, presentado por el partido político Perú Posible.
- Proyecto de Ley N ° 4476-2010-PE "Ley que modifica la tramitación del Recurso de Casación", presentado por el Poder Ejecutivo.
- Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley N° 1873/2012-CR y 3732/2014-PJ, que propone modificar diversos artículos del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.
- Proyecto de Ley N° 1881-2017-MP, "Ley que propone modificar los artículos 23° y 33° B.2 de la Ley N° 26977 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva", presentado por el Ministerio Público.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La excesiva cantidad de recursos que ingresan anualmente a la Corte Suprema, genera una sobrecarga que se traduce en retardo en el pronunciamiento jurisdiccional, en la imposibilidad de cumplir con una eficiente labor pedagógica en cada resolución y en la emisión de jurisprudencia contradictoria, confundiendo el panorama jurídico con la consecuente impredictibilidad de los fallos judiciales e inseguridad jurídica.

Este panorama es duramente criticado por la comunidad jurídica, quien en muchas oportunidades ha manifestado su disconformidad, inclusive se han propuesto diversas fórmulas legislativas –expuestas precedentemente- que buscan revertir dicha situación. Al respecto, Martín Hurtado[1] manifestó "En realidad no son nuevas las modificaciones al Código Procesal Civil (CPC). Datan del año 2009 y a 15 años de vigencia de este, se ha generado una gran confusión en abogados, magistrados y litigantes. La justificación de la modificación de esta norma, en materia civil, estaba vinculada a evitar la carga procesal de la Corte Suprema y a resolver con prontitud y a tener reglas de celeridad (para resolver rápido); sin embargo, esta situación no se dio."

[1] Entrevista a Martín Hurtado Reyes. "Las contradicciones no permiten que la Corte Suprema en sede casatoria ejerza plenamente su función uniformizadora". En: Actualidad Civil, Instituto Pacífico, volumen 16, octubre 2015, p. 29.

En esta misma línea, adicionalmente se ha detectado un problema trascendental que constituye un obstáculo para el cumplimiento del rol de la Corte de Casación, consistente en el conocimiento por parte de este Supremo Tribunal de los procedimientos de ejecución coactiva. En ese sentido, Francisco Távara[2] manifiesta que esta reforma del Recurso de Casación tiene que ir de la mano con una reforma más sistémica e integral, siendo lo fundamental ver cómo se reduce el ingreso de expedientes a la Corte Suprema, no siendo posible que la Sala Constitucional y Social Permanente del Supremo Tribunal –la más importante de la Corte Suprema- conozca en apelación este tipo de procedimientos dado que representan el 10 - 15% de la carga y no albergan mayor trascendencia jurídica que amerite ser conocido por el órgano colegiado de más alto rango.

Finalmente, se advierte que la falta de celeridad de los procesos judiciales tiene como origen –entre otras causas- el traslado de la apelación y la adhesión, por cuanto se vienen utilizando de forma desmedida con la única finalidad de dilatar el proceso, generando además desigualdad entre el apelado y el apelante.

1.3. EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA

Con la finalidad de asegurar una mayor Predictibilidad, es fundamental fortalecer el peso cualitativo de los pronunciamientos de la Corte Suprema. En este contexto, existe mayoritario consenso en que la reforma de la Corte Suprema debe empezar por limitar los casos que conozca este máximo tribunal, lo que comprende ciertamente disminuir la actual sobrecarga procesal. Si no se logra cumplir esta condición, resultaría sumamente difícil que la Corte pueda cumplir con una de sus funciones esenciales, la de fijar jurisprudencia, máxime si con ello lo que se quiere es establecer el marco y los procedimientos que permitan que los precedentes a fijarse por este alto tribunal sean efectivamente vinculantes[3].

---

[2] Ponencia del Dr. Francisco Távara Córdova. Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. II Jornada de Derecho Procesal Civil ¿Casación o Recurso Extraordinario? 17 de mayo de 2017. Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia. Transcripción del Área de Investigación y Publicaciones del Centro de Investigaciones Judiciales.

[3] TÁVARA CÓRDOVA, Francisco A. "El nuevo rol de la Corte Suprema de Justicia" https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwism_7DruvWAhXLE5AKHSGCCDQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe

En este contexto, resulta pues indefectible racionalizar la actividad de la Corte Suprema, para que esta logre afianzarse como un órgano de debate y resolución bajo parámetros jurídicos de los problemas sociales y políticos más trascendentes en el Perú[4].

Debemos recordar que la celeridad en la tramitación de los procesos judiciales y la justicia de sus decisiones son los pilares en los que se sustenta una buena administración de justicia. Para lograr este objetivo, es preciso que se cumplan los procedimientos y plazos que designa la ley. Lamentablemente, la excesiva carga procesal existente en los juzgados no permite cumplir con este objetivo.

Consecuentemente, se hace indispensable que el Poder Judicial -en mérito a la iniciativa legislativa que le confiere el artículo 80° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial modificada por la Ley N° 27465- proponga un conjunto de modificaciones al Código Procesal Civil y a la Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que permitirán una mayor eficacia en la tramitación de los procesos.

Las modificaciones que se formulan en el presente proyecto al Código Procesal Civil están destinadas -en primer lugar- a modificar el Recurso de Casación, proponiendo que la regulación de la admisibilidad del recurso sea efectuado por las Cortes Superiores de Justicia, la adecuación de la técnica procesal del doble conforme, el retorno del recurso de queja ante la denegación del Recurso de Casación, entre otras, las cuales permitirán que la Corte Suprema de Justicia de la República cumpla con el rol conferido por la ley como el más alto tribunal en la administración de justicia, guiando a los jueces de instancia y uniformizando la jurisprudencia. En segundo lugar, se ha estimado conveniente modificar lo concerniente al traslado del recurso de apelación y la eliminación de la adhesión, en la búsqueda de una justicia oportuna y célere.

Conforme lo expone el doctor Walde Jáuregui, –en la práctica- la mayor parte de los recursos de casación presentados carecen de un sustento válido para ameritar su concesión. Esta situación se ha puesto de manifiesto en diversas resoluciones expedidas bajo su ponencia, en la Sala Civil Permanente, como por ejemplo:

%2Findex.php%2Fderechoprocesal%2Farticle%2Fview%2F1437&usg=AOvVaw3lMyaJ7Ugr8Pr7amdW2xBV. Visitado: 28 de agosto de 2018.

[4] Ibídem.

- Casación N° 4251-2010 La Libertad[5]: "Consideramos que no es procedente en vía de casación proponer el re examen de los hechos y la revaloración de los medios probatorios aún cuando pueda invocarse novación de la obligación, que se han realizado los pagos a cuenta, o la existencia de una transacción que no aparezca en autos."

- Casación N° 605-2011 Lima[6]: "Al haberse alegado en sede casatoria que el título valor en ejecución se ha llenado contrariando los acuerdos adoptados para cambiar el criterio jurisdiccional establecido por las instancias de mérito, es en ellas en las que debe acreditarse esta aseveración que además debe conectarse con otro extremos de importante probanza oportuna que es el demostrar que se ha cancelado la obligación pendiente, razón por la cual el recurso Casatorios resulta IMPROCEDENTE".

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que la Corte Suprema busca a través de sus fallos lograr una mayor comprensión y redacción de los recursos de casación por parte de la comunidad jurídica. Ello se pone de manifiesto a través de la Casación N° 737-2011 Lima[7] mediante la cual la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema precisó que "El Recurso de Casación que se sustente en infracciones normativas de carácter procesal alegando vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso y motivación de resoluciones deberá argumentarse de manera que las alegaciones contenidas cumplan en señalar en qué habría consistido el error al aplicar o interpretar la norma infringida, debiendo repercutir esta en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurrido, lo que no se advierte del presente recurso, asimismo las alegaciones que contiene no deben estar orientadas a cuestiones de probanza como en el caso de autos donde el recurrente alega falta de pronunciamiento respecto de un contrato suscrito por las partes, pretendiendo la valoración de este en sede casatoria, además que dicho contrato no se encuentra en autos correspondiendo al recurrente su presentación, en este sentido la Sala Suprema señala que no se puede fundamentar el Recurso de Casación en la infracción normativa procesal derivada de la propia negligencia

[5] WALDE JAUREGUI, Vicente Rodolfo. "El Derecho Cambiario en la Legislación Peruana y en el Derecho Comparado. Parte Dogmática, Doctrina y Jurisprudencia". Logoimpresos EIRL, 2017, Pp. 365-368.
[6] WALDE JAUREGUI, Vicente Rodolfo. Ob. Cit. Pp. 369-371.
[7] WALDE JAUREGUI, Vicente Rodolfo. Ob. Cit. Pp. 372-375.

procesal del recurrente, por ello se declara IMPROCEDENTE el Recurso de Casación".

Finalmente, hemos creído conveniente limitar el acceso de causas a la Corte Suprema, debido a que esta sede debe entenderse como excepción, siendo inverosímil que este colegiado de mayor jerarquía conozca de materias que no tienen la relevancia jurídica que reviste su cargo, como son los casos bajo la Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

1.4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA PARTE DISPOSITIVA

1.4.1. CASACIÓN

1.4.1.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

CALIFICACIÓN DE LA ADMISIBILIDAD POR LAS CORTES SUPERIORES

Si bien la modificación del artículo 387° del Código Procesal Civil[8] buscaba evitar las dilaciones procesales, esta medida ha resultado contraproducente debido a que los jueces superiores deben elevar todos los recursos pese a que en muchos casos se verifica una manifiesta improcedencia, promoviéndose interposiciones maliciosas o temerarias que buscan dilatar los efectos de la resolución impugnada, con el correlato de que la parte vencedora deberá resignarse a que la Corte Suprema califique el Recurso de Casación y la rechace, produciéndose paradójicamente aquello que la modificación normativa buscó evitar: una mayor e indebida dilación procesal producida por el trámite de la casación hasta la calificación de su procedencia por la Corte Suprema y la consecuente limitación o restricción al derecho constitucional de la parte contraria a la efectividad de las resoluciones judiciales en un plazo razonable. Asimismo, es necesario agregar que el modelo del recurso directo no tuvo la acogida ni uso que se esperaba por cuanto implica un mayor gasto al litigante (en el caso de tramitarse su proceso en un distrito judicial distante) y porque el fallo judicial

[8] Establecida por la Ley N° 29364 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de mayo de 2009, por el cual se le quitaba a las Salas Superiores la potestad de calificar el Recurso de Casación.

podría estar ejecutándose en el momento que la Corte Suprema admite el recurso[9].

En la actualidad se usa el Recurso de Casación como un mecanismo de impugnación abiertamente dilatorio, así por ejemplo, cuando se presenta sin la respectiva tasa judicial o con tasa diminuta, este recurso es elevado a la Corte Suprema para su calificación no obstante ser manifiestamente inadmisible, concediéndole un plazo de subsanación, la cual puede acatarse o no, con el correlato de que dicho procedimiento puede durar hasta un año, cuando sin mayor dilación pudo ser resuelto por la sala superior[10].

Igualmente cabe precisar que cada año la carga procesal en este Supremo Tribunal aumenta progresivamente, debido no sólo al alto ingreso de recursos de casación sino también por aquellos que por atribución del artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial le compete. Es por ello que mediante Resolución Administrativa 392-CME-PJ de fecha 17 de junio de 1997, se dispuso la creación de la Sala Civil Transitoria con la finalidad de colaborar con la descarga procesal, la misma que viene laborando hasta la actualidad.

En ese sentido, esta medida coadyuvaría a reducir la carga procesal de las Salas Civiles de la Corte Suprema, resultando pertinente que las Cortes Superiores retomen la función de calificar previamente la admisibilidad de los casos antes de elevarlos y, de este modo, la Corte Suprema pueda centrar sus esfuerzos en cumplir con una función pedagógica a la judicatura y de uniformización de la jurisprudencia a nivel nacional.

CUANTÍA PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN

El establecer un criterio mínimo de cuantía de la pretensión para la interposición del Recurso de Casación –sin perjuicio de aquellas pretensiones no cuantificables- tiene como objetivo el constituirse como un filtro adicional a fin de disminuir la cantidad de recursos interpuestos, puesto que en la práctica todos aquellos procesos que empiezan en el juez especializado llegan a la Corte Suprema,

[9] HURTADO REYES, Martín "La Casación Civil. Una aproximación al control de los hechos", Editorial Idemsa, Lima, 2012, p. 115.

[10] Ponencia del Dr. Francisco Távara Córdova. II Jornada de Derecho Procesal Civil ¿Casación o Recurso Extraordinario? Ob. Cit.

lo cual genera un ingreso indiscriminado de procesos judiciales en dicha sede suprema. Con una cuantía determinada en materia de casación, el justiciable tendría las reglas claras con relación al momento en que su proceso debe concluir de forma definitiva[11].

Asimismo, la propuesta de esta *summa gravaminis* para la interposición del Recurso de Casación guarda congruencia en nuestro sistema jurídico con las cuantías establecidas de 100 unidades de referencia procesal en materia laboral (Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497) o de 140 Unidades de referencia procesal para los casos en materia contencioso administrativo (Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley N° 27584)[12]. Debemos considerar que "Las experiencias de la casación por cuantía en materia laboral o contenciosa administrativa deben servir de parámetro de comparación para este tema, no fijar cuantías en casación civil, donde la mayoría de litigios son de orden patrimonial, pone en peligro las propuestas de mejora que se deben hacer en el Recurso de Casación civil"[13].



De igual modo, permitiría disminuir la excesiva carga procesal que actualmente sufre la Corte Suprema, para poder centrar sus esfuerzos en resolver temas que sean verdaderamente relevantes. "Se explica esta posición, porque, en nuestro medio donde la cultura del litigio nos lleva siempre a lo mismo, agotar los recursos ordinarios y extraordinarios para "ganar tiempo" en causas perdidas lo que nos conduce a un uso "indiscriminado" de la casación y las estadísticas de improcedencia nos dan la razón en ese sentido" [14].

Asimismo, respecto al establecimiento de una cuantía para la interposición del Recurso de Casación, no obstante señalarse que se podría afectar el derecho a la igualdad de los justiciables, consideramos que ello es erróneo por cuanto en el Perú la distribución de competencia por el grado admite perfectamente el elemento de la cuantía como un factor a tomar en cuenta tal como ocurre en el ámbito del Recurso de Casación en materia laboral. La racionalidad de la medida propuesta radica en que los asuntos en materia civil son en gran parte cuantificables[15].

---

[11] HURTADO REYES, Martín Ob. Cit., P. 138.
[12] Proyecto de Ley N° 3732/2014-PJ.
[13] HURTADO REYES, Martín Ob. Cit., P. 138.
[14] Ibídem.
[15] TÁVARA CÓRDOVA, Francisco A. "El nuevo rol de la Corte Suprema de Justicia". Ob. Cit.

1.4.1.2. TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

Al haberse modificado el artículo 387° del Código Procesal Civil respecto a la presentación del Recurso de Casación ante el órgano que emitió la sentencia o auto -que cómo órgano de segundo grado pone fin al proceso-, en esta misma línea se modifica el trámite de la interposición del Recurso de Casación lo cual coadyuvará a la celeridad en los procesos judiciales tramitados en la Corte Suprema y el cumplimiento de los fines del Recurso de Casación.

De este modo, el recurso debe interponerse ante la sala superior que emitió la resolución impugnada, verificando los requisitos de admisibilidad del artículo 387°. Una vez admitido el recurso procederá a elevarlo a la Corte Suprema en el plazo de tres días, citando a las partes a fin de que se apersonen y fijen domicilio procesal en la sede de la Corte Suprema.

Una vez recibido el Recurso de Casación, la Corte Suprema procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 388° y 392° del presente proyecto de reforma; sin perjuicio de ello, la Corte Suprema excepcionalmente verificará los requisitos de admisibilidad preceptuados en el artículo 387° del referido Código.

Declarado procedente el Recurso de Casación, se señalará fecha y hora para la vista de la causa, convocándose a esta a los abogados sin necesidad de que soliciten el uso de la palabra. Esta incorporación del informe oral de los abogados sin que previamente haya alguna solicitud, permite a los jueces supremos conocer a través del interrogatorio el fundamento de la impugnación y la contradicción de la otra parte, respetando el derecho de defensa que les asiste; además contribuirá a disminuir la práctica habitual de los litigantes de solicitar cita antes de la vista de la causa con los jueces supremos (en algunos casos un mismo litigante solicita cita con todos los jueces que conforman el colegiado). Acorde con ello, en el caso que una de las partes emplazadas no fijen su domicilio procesal en la sede de la Corte Suprema, se le tendrá por notificado en la misma fecha que se notificó al que sí señaló su domicilio.

1.4.1.3. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN

Debemos señalar preliminarmente que el derecho a recurrir o impugnar las resoluciones judiciales -mediante su revisión ordinaria- constituye parte de las garantías del debido proceso, siendo que nuestra legislación ha venido ampliando el contenido de ese derecho, otorgándole la posibilidad de una revisión extraordinaria por medio del Recurso de Casación, al proceder respecto a determinadas resoluciones y solo por las causales taxativamente prescritas por la ley. No obstante, este medio de impugnación extraordinario no constituye un añadido al derecho a recurrir del justiciable, sino que surge como garantía para la correcta aplicación e interpretación del derecho, es decir, actúa como un medio para la unificación de la jurisprudencia y mantener incólume la voluntad del legislador expresada en la ley (como manifestación de los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato), resultando –pero de modo indirecto- una garantía del justiciable para la obtención de una sentencia justa y correcta. Es en ese sentido que corresponde al legislador establecer cuándo resulta procedente el acceso al Recurso de Casación para la consecución de sus fines[16].

Es en ese entendido que las causales de improcedencia incorporadas en el presente proyecto de reforma como "artículo 392° del Código Procesal Civil", pretenden constituirse –al igual que las medidas antes expuestas- en uno de los mecanismos para limitar el acceso a este procedimiento excepcional, facilitar el funcionamiento de la Corte Suprema y propiciar que esta máxima instancia se concentre en el cumplimiento de su finalidad nomofiláctica y uniformizadora.

Para ello se han tomado en consideración algunos supuestos de improcedencia, que buscan delimitar cualitativamente los procesos que serán de competencia de la Corte Suprema, entre los cuales encontramos: **(i)** la técnica procesal del doble conforme; cuya figura ya se encuentra incorporada para la casación en materia contencioso administrativo conforme lo prescrito por el artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, considerando que la existencia de dos sentencias conformes seguidas constituyen garantía suficiente de una adecuada resolución del conflicto jurídico. Esta técnica procesal no vulnera ningún derecho fundamental, pues el justiciable ha contado con la pluralidad de instancias donde los jueces de mérito han coincidido en estimar o,

[16] Sentencia del Tribunal Constitucional de Chile N° 2529-2013. En: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002015000200015#23. Visitado: 28 de agosto de 2018.

en su caso, desestimar la demanda; con lo cual no debe someterse estas dos decisiones coincidentes a la revisión en sede casatoria[17]: **(ii)** contra las resoluciones de los jueces superiores que anulen la sentencia de primera instancia; ello en el entendido que las resoluciones que son declaradas nulas total o parcialmente por el juez superior no ponen fin al proceso. Cabe precisar que actualmente se vienen presentando sendos recursos de casación contra este tipo de resoluciones con el único propósito de dilatar el proceso, por cuanto la redacción actual del artículo 388° del Código Procesal Civil permite su interposición; **(iii)** en los procesos de ejecución de laudo arbitral, por cuanto son las partes quienes eligen este medio alternativo de solución de conflictos, en aras de encontrar una solución rápida y efectiva; salvo aquellos procesos en que se emita una resolución que ampare total o parcialmente la oposición, **(iv)** en los procesos de ejecución de acta de conciliación y transacción; por cuanto su eje central es la autonomía de la voluntad de las partes y dicha finalidad solo se logrará en la medida que se concreten las expectativas de cumplimiento de lo acordado en un plazo corto y a un menor costo. **(v)** en los procesos de ejecución; dada su finalidad intrínseca de hacer efectivo de manera ágil un derecho cierto en el cual no se discute el fondo de la controversia, con la salvedad de aquellos casos en que se emita resolución donde ampare total o parcialmente la contradicción; y, **(vi)** en los procedimientos no contenciosos, a fin de evitar una excesiva judicialización de aquellos procesos de jurisdicción voluntaria.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA

1.4.1.4. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DEL RECURSO DE CASACIÓN

La propuesta de variación del término "resolución impugnada" por el de "recurso", tiene su fundamento en la búsqueda de una adecuada concordancia normativa del propio articulado del Código Procesal Civil, pues resulta incoherente esbozar "Aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388° (...)", cuando dicho artículo enumera los requisitos de procedencia del Recurso de Casación.

---

[17] PALACIOS PAREJA, Enrique Augusto. "El Recurso de Casación en el proceso civil. Dónde estamos y a dónde vamos". https://www.google.com.pe/search?q=casacion+reforma+filetype:pdf&lr=&cr=countryPE&hl=en&as_qdr=all&tbs=ctr:countryPE&ei=md3bWYjQHIiqwgSIx7qgAg&start=20&sa=N&biw=1152&bih=751# Visitado: 28 de agosto de 2018.

1.4.1.5. SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Siguiendo la línea de la modificación del Código Procesal Civil mediante la Ley N° 29364 se estima pertinente mantener el efecto suspensivo de la impugnación del Recurso de Casación.

Mucho se ha comentado que mantener el efecto suspensivo permite que algunos litigantes interpongan recursos de casación con la única finalidad de dilatar el proceso para evitar la ejecución de lo resuelto en segundo grado. Dicho efecto suspensivo impide que la resolución judicial impugnada adquiera la autoridad de cosa juzgada no permitiendo la ejecución de lo resuelto hasta lo decidido por el superior. Lo que ocurre en este caso es una situación donde se difiere la eficacia de la decisión judicial (*appellatione pendente nihil innovandum*)[18].

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA PRESIDENCIA

No obstante ello, se considera mantener el efecto suspensivo de la resolución impugnada debido a que, en principio, el artículo 392° de este proyecto pretende limitar el acceso al Recurso de Casación por medio de la *summa gravaminis*, doble conforme y al excluir algunas materias.

Asimismo, ante la propuesta de que el Recurso de Casación sea presentado y calificado en las salas superiores, se hace indispensable suprimir el segundo párrafo del artículo 393° del Código Procesal Civil.

1.4.2. QUEJA

Al haberse retomado la potestad de las Salas Superiores de denegar el Recurso de Casación por incumplimiento de los requisitos admisibilidad (conforme a los fundamentos expuestos precedentemente) resulta pertinente viabilizar este recurso de carácter instrumental a fin de permitir el re examen de aquella resolución que, pronunciándose sobre el Recurso de Casación, no lo concede. Ello responde a la necesidad de evitar que su sustanciación quede a merced del propio órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se pretende recurrir. Por ello proponemos se retorne al tenor de los artículos 401° y 403° del Código Procesal

[18] HURTADO REYES, Martín Ob. Cit. Pp. 182-183.

Civil, antes de la modificación establecida por la Ley N° 29364 publicada el 28 de mayo de 2009.

1.4.3. APELACIÓN Y ADHESIÓN

Todas las personas inmersas en un proceso determinado pueden hacer uso razonable de los medios impugnatorios diseñados preceptivamente por el legislador en los diversos textos procesales, a fin de que puedan cuestionar las diversas resoluciones expedidas por el órgano jurisdiccional. Es así que nos encontramos frente a un derecho fundamental de natural configuración legal que tutela básicamente el proceso y las garantías procesales[19]. Entre dichos medios impugnatorios, encontramos a la apelación y la adhesión a la misma, ambas recogidas por el Código Procesal Civil de 1993.

La apelación constituye el más importante recurso de los ordinarios, teniendo por fin la revisión, por el órgano judicial superior, de la sentencia del inferior. Es consecuencia del principio del doble grado que se considera, como una garantía esencial para el justiciable. Se trata de una revisión por un órgano superior y colegiado, lo cual constituye, una manera de efectuar un más profundo análisis de la cuestión objeto del proceso. El fin del recurso es revisar los errores in iudicando, sean de hecho como los de derecho[20].

Por otro lado, el recurso adhesivo consiste en la facultad del recurrido -que no apeló- de adherirse a la apelación de su adversario. Es una posibilidad que se otorga a quien no ha usado la apelación, sin embargo se beneficia por la interposición del recurso de su adversario, postulando a su vez, su impugnación sobre la base de los agravios que también a él causa la providencia. La adhesión a la apelación es un instituto muy antiguo, que en el derecho aparece y desaparece existiendo opiniones a favor y en contra. Respecto a esta última la doctrina sostiene que quien se considera perjudicado debe apelar y no esperar la apelación del otro. La oportunidad para adherirse es cuando se contesta el traslado de la apelación, aunque haya vencido el plazo para la contraparte, al recurrir una de ellas, se inicia para la otra un nuevo plazo al contestar el traslado. Lo que se hace es apelar con

[19] ALFARO VALVERDE, Luis G. "Ficción y Realidad en Torno a la Garantía Constitucional". En: Estudio de los Medios Impugnatorios en el Proceso Civil. Gaceta Jurídica, noviembre 2011, pp. 95-96.

[20] VÉSCOVI PUPPO, Enrique. "Los recursos judiciales y demás medios impugnatorios". En http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/sem_razo_juri_redac_resol/313-355.pdf Visitado: 28 de agosto de 2018.

posterioridad al otro, no siendo una verdadera adhesión, no existiendo apelante y adherente, sino primer y segundo apelante, lo cual determina una diferencia en el procedimiento. En esencia el recurso de adhesión tiene como finalidad que el adherente plantee nuevos puntos respecto a los perjuicios que le causa la sentencia[21].

De conformidad con nuestra legislación procesal (artículo 373° del Código Procesal Civil) interpuesta la apelación dentro del plazo previsto para cada vía procedimental, y concedida esta y elevado el expediente, el juez superior confiere traslado del escrito de apelación por un plazo de diez días (para los procesos de conocimiento y abreviado). Al contestar el traslado, la otra parte podrá adherirse al recurso, fundamentando sus agravios, de los que conferirá traslado al apelante por diez días. Con la absolución de la otra parte o del apelante si hubo adhesión, el proceso queda expedito para ser resuelto, con la declaración del Juez superior se señalará día y hora para la vista de la causa. El desistimiento de la apelación no afecta la adhesión.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA

En dicho trámite se puede verificar que, la inclusión de la figura del traslado de la apelación y la adhesión, lo que viene generando es una demora innecesaria en los procesos sujetos a este medio impugnatorio debido a las siguientes razones:

- Una vez recibido el expediente, el Juez de alzada corre traslado de la apelación al apelado, sin embargo, este acto se debe suprimir por cuanto la notificación de la concesión del recurso se constituye en el momento oportuno para que la otra parte tome conocimiento del recurso y -cuando llegue al juez de segundo grado- presente su escrito manifestando los argumentos pertinentes, con lo cual se garantiza el derecho a la contradicción.

- El Código Procesal no ha precisado los alcances y amplitud de la adhesión, lo cual ha generado que un sector de la doctrina considere que el recurso adhesivo consiste en otorgarle al apelado un nuevo plazo para impugnar la resolución que le causa perjuicio. Bajo este esquema, el recurso de adhesión atenta contra el principio de igualdad de las partes, al conceder al apelado un plazo adicional (el plazo de la apelación propiamente dicha, elevación del expediente, traslado de

[21] Ibídem.

apelación y la adhesión) produciéndole una ventaja frente al apelante que observó el plazo establecido, aprovechándose de la apelación producida por el apelante para revertir la resolución que le causa el gravamen.

- Asimismo, se ha detectado que en la práctica usualmente el apelado –en su adhesión- se limita a señalar como fundamentos los mismos agravios expresados por el apelante.

1.4.4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

El proceso de revisión judicial tiene por objeto revisar la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para el inicio y trámite de un procedimiento de ejecución coactiva. Se asemeja en gran medida a la queja que se interpone ante el Tribunal Fiscal, ya que no permite un cuestionamiento de fondo sino de forma. Se trata de un proceso contencioso administrativo de carácter especial que no discute la validez de una decisión administrativa sino simplemente el cumplimiento por parte del ejecutor de las normas que regulan el procedimiento[22] sobre el cobro de una suma de dinero y la ejecución de tareas de demolición, reparación, clausura o construcción ordenadas por ley[23]. Asimismo, no realiza un análisis de fondo de la controversia, sino más bien la verificación de una actuación ilegal por parte del ejecutor, constituyéndose en una sentencia declarativa.

Que, al tratarse de un procedimiento estrictamente formal, no amerita que sea conocida por la Corte Suprema de Justicia que -como órgano máximo de Justicia- debe conocer materias que revistan relevancia jurídica para la creación de precedentes jurisprudenciales que guíen a los demás órganos judiciales. En ese sentido, se propone que la competencia del órgano jurisdiccional en dicho procedimiento se inicie en los juzgados contenciosos administrativos y en segunda instancia lo conozcan las salas superiores.

II ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

[22] MENDOZA UGARTE, Armando. "La ejecución coactiva. Comentarios al Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva". Línea Negra editores, Lima, 2009, P 513.

[23] TIRADO BARRERA, José Antonio. "Ley de procedimiento de ejecución coactiva". Juristas editores, Lima, 2006, P. 44.

La aprobación de la presente iniciativa legislativa no generará gasto alguno al Estado, por el contrario, el beneficio de la aprobación del presente proyecto de ley es alto, en la medida que se reducirá la carga procesal tan excesiva en la Corte Suprema de Justicia de la República al haberse establecido una mayor rigurosidad en la interposición del presente recurso extraordinario. Por ende, se generará un ahorro a los recursos del Estado.

III ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Mediante la interposición del presente proyecto de ley se está reformulando instituciones que otorgarán mayor rigurosidad formal al recurso extraordinario de casación, en ese sentido su impacto coadyuvará a acelerar el proceso de descarga procesal en la Corte Suprema, por cuanto un menor ingreso de expedientes permitiría que la máxima instancia funcione con mayor celeridad en la solución de los conflictos y concentrarse en el cumplimiento de los fines del Recurso de Casación.

IV TEXTO NORMATIVO

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la República ha dado la reforma legislativa siguiente:

"LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401°, 403° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 23° Y 33B.2 DE LA LEY 26979.

"Artículo 1.- Modificación de diversos artículos del Código Procesal Civil
Modifíquese los artículos 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401°, 403° del Código Procesal Civil en los siguientes términos:

Artículo 367.- Admisibilidad e improcedencia

La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible.

El escrito que contiene el recurso de apelación que no acompañe el recibo de la tasa, se interponga fuera del plazo, que no tenga fundamento o no precise el agravio, será de plano declarada inadmisible o improcedente, según sea el caso.

Para los fines a que se refiere el artículo 357°, se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva, en las cédulas de notificación, en la autorización del recurso por el letrado colegiado o en la firma del recurrente, si tiene domicilio en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible.

Si el recurrente no tuviera domicilio procesal en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación, tramitará la causa de manera regular y será el juez quien ordene la correspondiente subsanación del error.

El superior también puede declarar inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.

Artículo 370.- Competencia del juez superior

El juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que **la otra parte también haya apelado o sea un menor de edad**. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa.

Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su tramitación

Artículo 373.- Plazo y trámite de la apelación de sentencias

La apelación contra las sentencias se interpone dentro del plazo previsto en cada vía procedimental, contado desde el día siguiente a su notificación.

Concedida la apelación, se elevará el expediente dentro de un plazo no mayor de veinte días, contado desde la concesión del recurso, salvo disposición distinta de este Código. Esta actividad es de responsabilidad del auxiliar jurisdiccional.

Recibidos los autos por el juez superior, el proceso queda expedito para ser resuelto, señalando día y hora para la vista de la causa.

Artículo 376.- Plazo y trámite de la apelación de autos con efecto suspensivo

La apelación contra los autos a ser concedida con efecto suspensivo, se interpone dentro de los siguientes plazos:

1. Tres días si el auto es pronunciado fuera de audiencia; o
2. En la misma audiencia, si el auto fuera expedido en ella, pero su fundamentación y demás requisitos serán cumplidos en el mismo plazo que el inciso anterior.

El secretario de juzgado enviará el expediente al superior dentro de cinco días de concedida la apelación, bajo responsabilidad.

Dentro de cinco días de recibido, el superior comunicará a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos y señalará día y hora para la vista de la causa.

Es inadmisible la alegación de hechos nuevos.

La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa.

Artículo 377.- Trámite de la apelación sin efecto suspensivo

La apelación se interpone dentro de los mismos plazos previstos en el artículo anterior. En la misma resolución que concede la apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, se precisa los actuados que deben ser enviados al superior, considerando los propuestos por el recurrente al apelar, sin perjuicio de que la instancia que resuelva pueda pedir **los actuados judiciales** que considere necesarios.

El auxiliar jurisdiccional, dentro de cinco días de notificado el concesorio, bajo responsabilidad, remite a la instancia correspondiente las piezas indicadas por el juez, debidamente escaneadas, formando un cuaderno de apelación virtual, además del oficio de remisión firmado por el juez, agregando el original al expediente principal que eleva en CD u otro medio magnético y dejando constancia de la fecha del envío.

En los casos en que los órganos jurisdiccionales no cuenten con la posibilidad de escanear, el auxiliar jurisdiccional remite las fotocopias de los actuados judiciales.

En los casos que una misma resolución haya sido apelada por varias partes o personas, se formará un solo cuaderno de apelación, bajo responsabilidad.

Recibido el cuaderno por la instancia que resuelve la apelación, esta comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos. En este trámite no procede informe oral, ni ninguna otra actividad procesal. Sin perjuicio de ello, el superior podrá de oficio citar a los abogados a fin que informen o respondan sobre cuestiones específicas contenidas en la resolución apelada.

Artículo 387.- El Recurso de Casación se interpone:

1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso.
2. **Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada.**
3. Cuando la cuantía discutida supere las **300 unidades de referencia procesal o las pretensiones que no sean cuantificables.**
4. Dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notificada la resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda.
5. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva.

Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1, **2,** 3 **y 4, la Sala Superior** rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 10 ni mayor de 50 Unidades de Referencia Procesal en caso de que

considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del impugnante.

Si el recurso no cumple con el requisito previsto en **el numeral 5,** la Sala Superior concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de 10 ni mayor de 20 Unidades de Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el recurso.

Artículo 391.- Trámite del recurso

La Sala Superior ante la cual se interpone el recurso, dentro del plazo de tres días verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 387°. Admitido el recurso, lo elevará a la Sala Suprema dentro del tercer día con citación de las partes a fin de que se apersonen y fijen domicilio procesal en la sede la Corte Suprema. En caso de no señalar domicilio se le tendrá por notificado el mismo día que se notificó a la parte contraria.

Recibido el recurso, la Corte Suprema procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos del artículo 388° y resolverá declarando procedente o improcedente el recurso según sea el caso.

Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fijará fecha y hora para la vista de la causa, a la que están convocados los abogados de las partes sin necesidad de que pidan el uso de la palabra.

Artículo 392.- Improcedencia del recurso

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del recurso.

Asimismo, no procede el Recurso de Casación:

1. **Contra las resoluciones de segundo grado que confirman la decisión judicial que estiman la pretensión.**
2. **Contra las resoluciones de los jueces superiores que anulen la sentencia de primera instancia.**
3. **En los procesos de ejecución de laudo arbitral, salvo en los que se emita resolución que ampare total o parcialmente la oposición.**
4. **En los procesos de ejecución de conciliación o transacción.**
5. **En los procesos de ejecución, salvo en los que se emita resolución que ampare total o parcialmente la contradicción.**

6. En los procedimientos no contenciosos.

Artículo 392-A.- Procedencia excepcional

Aun si el **recurso** no cumpliera con algún requisito previsto en **los artículos** 388°, la corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el artículo 384°. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la corte motivará las razones de la procedencia.

Artículo 393.- Suspensión de los efectos de la resolución impugnada

La interposición del recurso **suspende** los efectos de la resolución impugnada.

Artículo 401.- Objeto. -

El recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación **o de casación.** También procede contra la resolución que concede apelación en efecto distinto al solicitado.

Artículo 403.- Interposición

La queja se interpone ante el superior que denegó la apelación o la concedió en efecto distinto al pedido, o ante la **Corte de Casación**[24] en el caso respectivo. El plazo para interponerla es de tres días, contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución que deniega el recurso o de la que lo concede en efecto distinto al solicitado. Tratándose de distritos judiciales distintos a los de Lima y Callao, el peticionante puede solicitar al juez que denegó el recurso, dentro del plazo anteriormente señalado, que su escrito de queja y anexos sea remitido por conducto oficial. El juez remitirá al superior el cuaderno de queja dentro de segundo día hábil, bajo responsabilidad.

Artículo 2.- Modificación de los artículos de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley N° 26979

Modifíquese los artículos 23° y 33°B.2 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley N° 26979 en los siguientes términos:

Artículo 23.- Revisión judicial del procedimiento

[24] Término incorporado en el Código Procesal Civil antes de la modificación establecida por el artículo 1 de la Ley 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite para efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan a continuación:

23.1. El obligado, así como el tercero sobre el cual hubiera recaído la imputación de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 18° de la presente Ley, están facultados para interponer demanda ante **el juez especializado en lo contencioso administrativo**, con la finalidad de que se lleve a cabo la revisión de la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, en cualquiera de los siguientes casos:



a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado o el responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, así como cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 de la presente Ley.

b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento.

23.2. El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso contencioso administrativo de acuerdo al proceso **ordinario** previsto en el artículo **27** de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo.

En este tipo de procesos, no es necesaria la intervención del Ministerio Público.

23.3. La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva, únicamente en los casos de actos administrativos que contengan obligaciones de dar, hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento **del juez especializado en lo contencioso administrativo**, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16°, numeral 16.5 de la presente Ley.

El obligado o el administrado al cual se imputa responsabilidad solidaria sujeto a ejecución coactiva, entregará a los terceros copia simple del cargo de presentación de la demanda de revisión judicial, la misma que constituirá elemento suficiente para que se abstengan de efectuar

retenciones y/o proceder a la entrega de los bienes sobre los que hubiere recaído medida cautelar de embargo, así como efectuar nuevas retenciones, bajo responsabilidad, mientras dure la suspensión del procedimiento.

23.4. **El juez especializado en lo contencioso administrativo** deberá emitir pronunciamiento sobre la demanda de revisión por el solo mérito de los documentos presentados, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 23.2.

Si **el juez especializado en lo contencioso administrativo** no emite resolución al término de los sesenta (60) días hábiles desde la presentación de la demanda, se mantendrá la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, inclusive durante el trámite del recurso de apelación ante **la sala superior** a que se refiere el numeral 23.8, siempre que el demandante a su elección, presente en el proceso póliza de caución, carta fianza irrevocable, incondicional y de ejecución inmediata, emitida por un Banco local de primer orden a nombre de la entidad acreedora por el importe de la obligación renovable cada seis (6) meses; o efectúe la consignación del monto exigido ante el Banco de la Nación, a nombre **del juez especializado en lo contencioso administrativo.** La ejecución de la póliza de caución, carta fianza o la entrega al Ejecutor Coactivo de los fondos consignados sólo procederá cuando medie orden judicial expresa.

23.5. Para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde al **juez especializado en lo contencioso administrativo** resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la presente Ley.

En los casos en que se advierta la presencia de evidente irregularidad o ilegalidad manifiesta en el trámite del procedimiento de ejecución coactiva, que hubiera conducido a la producción de daños económicos verificables y cuantificables, **el juez especializado en lo contencioso administrativo**, además de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, podrá determinar la existencia de responsabilidad civil y administrativa del Ejecutor y el Auxiliar coactivo y el monto correspondiente por concepto de indemnización.

23.6. En concordancia con lo establecido en el artículo 392° del Código Penal, incurre en delito de concusión el ejecutor o auxiliar coactivo que, a pesar de tener conocimiento de la interposición de la demanda de revisión judicial, exija la entrega de los bienes mientras dure la suspensión del

procedimiento de ejecución coactiva, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa a que se refiere el artículo 22° de la presente Ley.

23.7. Sólo con resolución judicial favorable **del juez especializado en lo contencioso administrativo** sobre la legalidad del procedimiento y sobre la procedencia de la entrega de los bienes, valores, fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros intervenidos, recaudados y/o retenidos, el ejecutor coactivo o la propia entidad, si fuera el caso, podrá exigir la entrega de los mismos.

23.8. Para efectos del proceso de revisión judicial será competente **el juez especializado en lo contencioso administrativo** lugar donde se llevó a cabo el procedimiento de ejecución coactiva materia de revisión o la competente en el domicilio del obligado.



La sala civil constituye la segunda instancia. En los lugares donde no exista sala contencioso administrativa es competente la sala civil correspondiente y en defecto de ésta, la que haga sus veces.

En los procesos de revisión judicial no procede el Recurso de Casación.

Artículo 33-B.- Entrega de fondos retenidos o recaudados mediante embargo.

(...)

33-B.2 Si la medida cautelar dictada es de intervención en recaudación, el tercero interventor deberá consignar directamente los fondos recaudados en un depósito administrativo a nombre de la Entidad en el Banco de la Nación. Los fondos que se depositen en dicha cuenta quedarán retenidos y sólo podrán ser entregados después de culminado el Procedimiento y, de ser el caso, después de que **el juez** competente se haya pronunciado sobre la legalidad del embargo resolviendo el recurso de revisión judicial a que se refiere el artículo 23° de la presente Ley, cuando éste hubiera sido interpuesto.

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Firma Digital
Firmado digitalmente por PEÑALOZA MATIAS William Carlos FAU 20159861216 soft
Secretario General De La Corte Suprema De Justicia
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03.09.2021 10:53:59 -05:00

Lima, 03 de Septiembre del 2021

OFICIO N° 002899-2021-SG-CS-PJ

Señor
HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor del Congreso de la República
Presente. -

Referencia : Oficio N.° 468-2021-2022-ADP-D/CR

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, hacer que su conocimiento que el 16 de marzo de 2021, vía correo electrónico se remitió al Congreso de la República, el Oficio N.° 000073-2021-P-PJ, mediante el cual se presentó el Proyecto de Ley que propone la modificación de los artículo 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401° y 403° del Código Procesal Civil, artículos 23° y 33 B.2 de la Ley N.° 26979, en mérito a la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, es pertinente señalar que dicho proyecto de ley no se ubica en la página web del Congreso de la República, lo que no permite identificar el estado del mismo; por ello, a fin de darse el trámite correspondiente, se reiteró la presentación de la referida iniciativa legislativa y la Resolución Administrativa N.° 000005-2021-SP-CS-PJ emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través del Oficio N.° 000223-2021-P-PJ, el mismo que fue derivado por correo electrónico el 23 de agosto de 2021.

Se adjunta, copia del Oficio N.° 000223-2021-P-PJ, dirigido a la señora María Del Carmen Alva Prieto, presidenta del Congreso de la República, así como del correo que se remitió.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

WILLIAN CARLOS PEÑALOZA MATIAS
Secretario General
Corte Suprema de Justicia de la República
(Documento firmado digitalmente)

WPM/bmr

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd CODIGO: 197788 CLAVE: EF7CDT

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Presidencia del Poder Judicial

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Firma Digital

Firmado digitalmente por BARRIOS ALVARADO Elvia FAU 20159981216 soft
Cargo: Presidenta Del Poder Judicial
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.03.2021 17:37:56 -05:00

Lima, 15 de Marzo del 2021

OFICIO N° 000073-2021-P-PJ

Señora Magíster
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta del Congreso de la República
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla muy cordialmente y a la vez, remitirle el Proyecto de Ley que propone la modificación de *los artículos 367°, 370°, 373°, 376°, 377°, 387°, 391°, 392°, 392-A, 393°, 401° y 403° del Código Procesal Civil, artículos 23° y 33 B.2 de la Ley N.° 26979,* el mismo que a mérito de la facultad de iniciativa legislativa prevista en el artículo 107° de la Constitución Política del Perú presento ante su Despacho.

En tal sentido, adjunto al presente la Resolución Administrativa N.° 000005-2021-SP-CS-PJ y el referido proyecto de ley, para los fines de su competencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a usted los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
(*Documento firmado digitalmente*)
Presidencia del Poder Judicial

EBA/bmr

Firma Digital

rmado digitalmente por
EÑALOZA MATIAS Willian Carlos
AU 20159981216 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 25.02.2021 18:15:00 -05:00

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en: **https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd** CÓDIGO: **132946** CLAVE: **8X0LMF**